

LA IGUALDAD DE LOS SEXOS Y LA SALUD EN NUESTRA DÉCADA¹

Los años noventa se caracterizan por marcados cambios de la estructura socioeconómica en los países de la Región y, especialmente, por la introducción del concepto de equidad social como norma ética de conducta en la esfera productiva. Como consecuencia de estos cambios la población femenina de nuestros países se encuentra ante un momento crítico y decisivo. ¿Hasta qué punto cosecharán las mujeres los frutos de esta nueva tendencia ideológica, o hasta qué punto seguirán oprimidas por los patrones tradicionales de sumisión e inferioridad que ponen en menoscabo su salud física y emocional? La pregunta es, de hecho, si las reformas hasta ahora propuestas en el campo de la equidad favorecen o desfavorecen en algún sentido a la mujer, si son o no propicias a su salud integral, o si encierran el prejuicio de décadas de antifeminismo sutil pero seguro y, por lo tanto, merecen modificación.

Se sabe de sobra que la salud física y psicosocial del individuo obedece, en gran parte, a la convergencia de múltiples factores ambientales, entre los que ocupan un plano primordial las condiciones domésticas y ocupacionales y las oportunidades de educación, desarrollo y acceso a buenos servicios de salud y programas de bienestar social. Los cambios que asoman en la esfera socioeconómica, por consiguiente, se traducirán en último término en el mejoramiento o empeoramiento de la salud de los habitantes. Si estos cambios no ofrecen a la mujer condiciones de verdadera equidad en todas las áreas de su desenvolvimiento y una voz decisiva en las políticas que rigen su salud, el resultado será la perpetuación de un sistema en que sus necesidades seguirán relegadas a un plano secundario. En cambio, la creación de condiciones sociolaborales verdaderamente equitativas redundará indudablemente en un mejor estado de salud para la mujer y su familia.

El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) presta gran atención a este problema, explorando sobre todo cómo han repercutido en la población femenina la crisis y políticas de los años ochenta. El análisis de dos documentos recién publicados —el de la Conferencia Regional sobre la Pobreza en América Latina y el Caribe que se celebró en Cartagena, Colombia, en 1988, y el de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPALC)— nos ayuda a entender el papel otorgado a la mujer en las propuestas de reestructuración actuales que dicen fundarse en el concepto de equidad. A continuación se

¹ Basado en: United Nations Development Fund for Women. "The challenge of the decade of the nineties: the restructuring of productivity with gender equity in Latin America." Nueva York, 1991 (Documento mimeografiado UN/OAS/GM/CRP.15).

describe, primero, el panorama socioeconómico surgido a raíz de la crisis de los años ochenta y sus políticas compensatorias. Se exponen a la vez las interpretaciones de estos fenómenos dadas en los dos documentos citados. En segundo lugar se definen los conceptos de equidad social y sexual y se enfocan las estrategias prácticas con que estos conceptos pueden fundirse en pro del bienestar y la salud de hombres y mujeres en igual medida.

Las mujeres de la clase laboral y las propuestas de equidad

Consecuencias de la crisis de los años ochenta. Durante la década de los ochenta en América Latina se presenciaron cambios hacia sistemas de gobierno más democráticos y pluralistas. Lamentablemente, también fue una década de regresión socioeconómica para la mayor parte de los países. Disminuyó enormemente el producto bruto doméstico per cápita y se produjo un marcado descenso del coeficiente de inversión (de 23 a 16,5% entre 1980 y 1988) que obstaculizó el progreso tecnológico. Muchos de los países no pudieron combatir la inflación y al mismo tiempo reducir su deuda externa. Se calcula que durante la década de los ochenta el intercambio neto de divisas —propiciado en gran parte por deudas excesivas— fue de más de \$US 200 millones. Las clases media y obrera fueron las más afectadas. El nivel de pobreza, empeorado por el desempleo, subempleo y autoempleo, aumentó considerablemente en la Región y se produjeron conflictos sociales propios de una situación en que las principales fuentes de empleo son las pequeñas empresas familiares.

La propuesta de Cartagena, Colombia. A raíz de la Conferencia Regional sobre la Pobreza en América Latina y el Caribe se publicó un documento de las declaraciones y resoluciones pertinentes en que se exponen los parámetros y prioridades que aplican los gobiernos de la Región al elegir sus acciones y políticas reformistas. El documento explica que, en 1988, 170 millones de habitantes de América Latina y el Caribe (40% de la población total) vivían en condiciones de extrema pobreza. Indica, además, que la pobreza se acentuó desproporcionadamente en la población femenina, la cual, desfavorecida en las áreas de salud, nutrición, educación y vivienda, ha tenido que ir incorporándose al sector “informal” de las economías latinoamericanas y caribeñas.

El documento de Cartagena se apoya en la premisa de que la pobreza en la Región no es fortuita ni transitoria, sino que está enraizada en los fenómenos históricos y estructurales que se han gestado a través de los siglos en la esfera doméstica e internacional. También señala que una de las causas externas más importantes de esta situación es la inestabilidad internacional, la cual redundando en un intercambio comercial deteriorado; proteccionismo a favor de los países industrializados; restricciones financieras; deudas externas de gran magnitud; altas tasas de interés, y otros problemas. Entre las causas internas se señalan un desarrollo económico insuficiente y un esquema de producción y gasto público que tiende a perpetuar la distribución poco equitativa de la riqueza nacional. Todo esto reduce el rendimiento y los salarios e incrementa el papel de los servicios de beneficencia gubernamentales. De hecho, la pobreza y el deterioro de la salud son cada vez mayores.

El documento de Cartagena favorece una reestructuración basada en políticas destinadas a fomentar el desarrollo económico y a la vez proteger a los países y sus economías de los perjuicios ocasionados por los factores externos

citados. Aboga no solo por un mejor equilibrio macroeconómico, sino también por la eliminación del desempleo y la protección de los grupos menos favorecidos (entre los que figuran las mujeres). En el documento se sugieren la creación de programas que brinden el máximo grado de bienestar y empleo y el respaldo de los indigentes mediante su mayor acceso a recursos productivos y al seguro social; la provisión de abundantes bienes y servicios, entre ellos los de carácter sanitario; la inclusión de los pobres de las zonas rural y urbana en actividades productivas, y la estandarización de los reglamentos de intercambio comercial en el país mediante la intervención activa del gobierno.

Por último, en el documento de Cartagena se sostiene que para erradicar la pobreza hace falta un alto grado de cooperación entre los países de la Región, pese a la existencia de factores condicionantes externos, y que los programas compensatorios que rigen actualmente son inadecuados porque solo ofrecen soluciones a corto plazo. Puesto que es crítica la relación entre el intercambio comercial, la deuda y las finanzas, la deuda externa no se podrá pagar sin que se logre un mayor desarrollo económico. En este documento se otorga importancia prioritaria al pago de la deuda externa y a la adopción de medidas para reestructurar los sistemas monetarios y económicos internacionales, dando ímpetu al intercambio comercial alrededor del mundo.

La propuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPALC), emitido en 1990, contiene muchas de las premisas del documento de Cartagena y representa, en realidad, una versión depurada del conjunto de propuestas que se han hecho hasta la fecha para conseguir cambios de productividad basados en la equidad.

La industrialización y las economías de exportación son, según el documento de la CEPALC, piedra angular de cualquier transformación orientada a la equidad de las actividades productivas. Las dos primeras tienen que acompañarse, por supuesto, de la incorporación sistemática de nuevas tecnologías al proceso de producción para que se produzca una competencia “auténtica” en los mercados internacionales. Tal competencia, según la define la CEPALC, se apoya en un aumento de la productividad y no en la devaluación de los salarios. Requiere, además, una incesante modernización tecnológica, haciéndose énfasis en la investigación y desarrollo de nuevos productos para enriquecer el valor intelectual de los bienes y servicios de exportación. Estas medidas favorecen un aumento de salarios en concordancia con el grado de rendimiento, así como una distribución de ingresos más equitativa. También señala el documento que el concepto de equidad exige cambios en la esfera productiva acompañados de medidas de redistribución complementarias; servicios técnicos, financieros y mercantiles; programas de entrenamiento para microempresarios, personas autoempleadas y campesinos; la adaptación de los servicios sociales y de salud a las necesidades de las clases más pobres, y el fomento de apoyo mutuo entre las organizaciones que interceden ante el gobierno en defensa de las clases pobres. En el documento de la CEPALC también se propone aplicar la política fiscal para obtener una redistribución de los ingresos y reorientar el gasto público.

La mujer en los documentos de Cartagena y la CEPALC. En el documento de Cartagena los problemas de la mujer se conciben como parte de la problemática global de los grupos más necesitados, sin diferenciación alguna. Se presupone que cuando surtan su efecto las estrategias de desarrollo económico y mejoren las con-

diciones de vida y de salud en general y de las poblaciones más vulnerables en particular, los beneficios se “filtrarán” a las mujeres al igual que a los hombres y a otros subsectores de la población. Se coloca a las mujeres en el mismo plano que los niños y grupos vulnerables, lo cual encierra una connotación de deficiencia funcional o fisiológica y delega al plano humanitario el interés por la mujer y sus necesidades. Se da por sentado, además, que las nuevas políticas bastarán para satisfacer todas las necesidades de las mujeres, incluidas las de salud. El documento de Cartagena, por lo tanto, incluye los intereses femeninos únicamente en la sección de políticas sociales, como si fueran ajenos a la macroeconomía. Las mismas tendencias, pero en mayor grado, se destacan en el documento de la CEPALC, en el cual la mujer pasa completamente desapercibida.

Las mujeres pobres no son sencillamente otro grupo vulnerable más; su problemática es muy singular y obedece a la subyugación y al perjuicio perpetuados por políticas fundadas en la desigualdad de los sexos. Las mujeres siguen cobrando sueldos inferiores a los de los hombres, tienen menos perspectivas de adelanto laboral que estos y trabajan en peores condiciones. Sufren discriminación en el terreno legal y una pobreza institucionalizada de la que raras veces logran escapar. No tienen voz ni voto en las políticas oficiales que rigen su salud y la de sus hijos. Ante tales condiciones, es muy dudoso que las nuevas políticas que pretenden conjugar el desarrollo económico y la equidad social dentro de un mismo esquema reformista redunden en condiciones de mayor justicia para la mujer. La meta de equidad social, por consiguiente, no garantiza la equidad sexual. Cabe, sin embargo, preguntarse por qué no y someter a un escrutinio minucioso las nuevas políticas y programas, adaptándolos a las necesidades particulares de las mujeres y los hombres, sobre todo en lo que respecta a la salud.

Propuestas de desarrollo y equidad social y sexual

Si bien los documentos de Cartagena y la CEPALC abrieron el camino para una mayor equidad social, hay que ir más allá para incorporar el concepto de equidad sexual en la esfera de la productividad y la salud. Este es el momento, ya que la crisis de los años ochenta ofrece la oportunidad de una renovación.

La equidad sexual descansa en la noción de que los hombres y mujeres son seres iguales. Es necesario que en los países de América Latina y el Caribe se definan mejor el papel respectivo de cada sexo y las relaciones entre ambos. El concepto de equidad debe aplicarse, primero, en el nivel macroeconómico y extenderse a los terrenos comercial y doméstico y sanitario y a las uniones laborales, recordando que de nada servirá adoptar reformas aisladas en el nivel microeconómico.

Consciente del desafío que enfrentan en este sentido los países de la Región, El UNIFEM ha identificado algunos campos de acción en que los gobiernos pueden poner en práctica políticas de crecimiento y desarrollo orientadas en torno a la equidad social y sexual. Primero, los indicadores nacionales deben disgregarse por sexo para poder elaborar un esquema analítico. También es importante modificarlos de manera que reflejen la labor no remunerada de la población femenina en el sector “informal” de la economía y en empresas familiares. Se necesitan indicadores domiciliarios más eficaces y una redefinición del domicilio como unidad de análisis, ya que en la actualidad a menudo se olvida el papel principal que muchas mujeres desempeñan como proveedoras y jefes de familia.

Las políticas de exportación y desarrollo tecnológico delineadas en el documento de la CEPALC perpetúan la supremacía del sexo masculino en el campo económico. Las mujeres no solo quieren trabajar, sino tener acceso a cargos estimulantes y bien remunerados. Por consiguiente, las políticas de equidad deben enfocar la calidad y no solo la disponibilidad de las fuentes de empleo. Cualquier política de desarrollo industrial que, como la de la CEPALC, favorezca a un grupo limitado de trabajadores en cargos empresariales de importancia debe ser vista con recelo y reemplazada con otra estrategia que promueva los intereses de grupos marginados y con una nueva estructura fiscal y de cobro de impuestos.

Las mujeres deben ser debidamente representadas en las industrias promovidas, donde deben integrarse no solo a la mano de obra sino a la fase creadora y diseñadora de nuevas tecnologías. Es indispensable que tengan el mismo acceso que los hombres a las escuelas técnicas y vocacionales y a la enseñanza superior. Por último, la integración equitativa de la población femenina a la esfera industrial debe acompañarse de cambios en la distribución de tareas dentro del hogar para que la mujer no termine con una carga excesiva de responsabilidades.

Tradicionalmente la mujer ha figurado como receptora de políticas, sin poder de decisión sobre ellas. Se impone la necesidad de conceder a la mujer una función determinante en las políticas que atañen a sus intereses, sobre todo los que se relacionan con su salud y la de su familia. En el contexto de las pequeñas empresas, la mujer debe, de rigor, comenzar a ejercer un papel administrativo a la par del hombre. Los grupos cooperativos, que suelen surgir en épocas de recesión económica, le son especialmente favorables, ya que los propios trabajadores son los dueños y administradores; la opinión de cada miembro tiene el mismo peso; hay un ambiente comunitario en que cada miembro puede desarrollar sus inclinaciones y aptitudes, y se produce el intercambio de nuevas ideas en un ambiente de mutua colaboración y de sugerencias constructivas. Las cooperativas les permiten a las mujeres mayor flexibilidad que las compañías privadas en la fijación de horarios y políticas administrativas y les ofrecen oportunidades de capacitación en áreas que siempre se han considerado monopolio del sexo masculino.

Las cooperativas, por otra parte, tienen algunas desventajas. Entre ellas se encuentran las dificultades de financiamiento, de obtención de personal y de asistencia técnica, y los impedimentos burocráticos que dificultan su formación. De todos los obstáculos, sin embargo, el peor es la falta de disposición de las autoridades nacionales a promover la formación de cooperativas en el nivel local y nacional. No obstante, abundan ejemplos de cooperativas, como la de Mondragón en España, la de Manos en el Uruguay, y otras en Bangladesh y la India, que han logrado superar obstáculos semejantes.

En América Latina ya hay bastantes grupos de trabajo autodirigidos, pero la mayor parte se ven muy menoscabados por la falta de coordinación y el aislamiento. Muchos fueron auspiciados en un principio por organizaciones internacionales pero sin un buen esquema global. En la Argentina, por ejemplo, se han ideado algunos proyectos —como el de exportar conejos a Europa para fines de alimentación— que han permanecido en el nivel puramente teórico. Lo mismo sucede en el terreno industrial. Las nuevas tecnologías podrían aplicarse en organizaciones pequeñas o medianas poco tradicionales. En resumen, estas iniciativas requieren el apoyo de entidades en el nivel macroeconómico e internacional, y también el de las instituciones locales de tipo educacional o financiero. Por el momento, al menos, este nuevo sector social parece prometedor pero aún no se ha empezado a explotar debidamente. □